

Por una industria extractiva más transparente y responsable

La iniciativa EITI, lanzada inicialmente en 2002, promueve la rendición de cuentas y la transparencia, tanto en el sector minero, como en el de hidrocarburos, e involucra a los sectores privado y público. Con la consolidación de esta propuesta se establece una política para un modelo real de progreso, a la vez que se jalona el concepto del desarrollo sostenible fuera del ámbito académico hacia una práctica concreta de la industria. Todo esto, a través de una coalición de gobiernos, compañías, inversionistas y organizaciones de la sociedad civil, entre otros socios.

A la fecha, hay 46 países y más de 80 compañías privadas, muchas de las cuales cuentan con operaciones en Colombia, implementando la iniciativa a nivel mundial. Adicionalmente, existen 21 organizaciones participando, tales como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En mayo de 2013, el exministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, manifestó públicamente la intención del gobierno colombiano de buscar la candidatura a la Secretaría del EITI antes del segundo semestre de 2014. De cumplirse, los prerequisites, el país se convertiría en el segundo en Suramérica y el cuarto de Latinoamérica en implementar el estándar. Perú y Guatemala ya cuentan con el estatus de "cumplimiento", mientras que Honduras es "candidato". La diferencia entre los dos es que un candidato solo le ha solicitado al Comité de EITI que se considere su aplicación, mientras que cuando se alcanza el "cumplimiento" se entiende que el país acata los requerimientos del estándar y se ha surtido el proceso de validación.

La versión final del plan de acción de EITI Colombia fue aprobada por el Comité Tripartito Nacional el 28 de agosto de 2014 y se envió a la Secretaría de EITI. Sus participantes incluyen entidades públicas, como el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y

la DIAN; representantes del sector extractivo como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP); la Asociación Colombiana de Minería, y representantes de la sociedad civil como Transparencia por Colombia, el Foro Nacional por Colombia y la Universidad Externado.

Avances preliminares y consensos básicos

Varios integrantes de esta iniciativa que se dio a lo largo de Colombia (incluido el autor de esta columna) participaron en el desarrollo del plan de acción. Para alcanzar unos consensos básicos, fue necesaria la coordinación, consulta y diálogo con actores del sector público y el sector privado, y diferentes comunidades impactadas por el desarrollo minero-energético, entre otros grupos de interés. El nivel de colaboración alcanzado ha permitido que el plan vaya más allá de los requisitos del mencionado

A la fecha, hay 46 países y más de 80 compañías privadas, muchas de las cuales cuentan con operaciones en Colombia, implementando la iniciativa.

estándar internacional. Y, según las conclusiones de la Mesa de la Sociedad Civil y la Secretaría Técnica para Colombia, ya se contemplan los siguientes aspectos.

Principales conclusiones

- Desarrollar una estrategia de alcance territorial, que permita acceder y cerrar brechas en la información para que esta sea

más precisa, en cuanto a pagos subnacionales, giros nación-territorio y gastos en inversión local.

- Implementar una estrategia de formación, sensibilización y generación de capacidades en la ciudadanía y autoridades locales, para el uso efectivo de la información generada por el EITI.

- Divulgar abiertamente los contenidos de contratos, observando únicamente las limitaciones impuestas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Comunicar, a discreción de las empresas, los aportes realizados en inversión social voluntaria y cifras en empleo indirecto, en complemento al gasto social obligatorio y datos de empleo directo ya considerados por el estándar.

- Adicionalmente, uno de los asuntos que ha presentado una relevancia mayor para el proceso del EITI es la posibilidad de acceder a mejor información en materia ambiental, específicamente sobre los pagos por conceptos ambientales y de instrumentos como las licencias. Este aspecto, no contemplado en el estándar de 2013, ha sido fundamental para involucrar a la sociedad civil en el plan de acción.

Al momento, esta iniciativa ha demostrado que los ciudadanos del país, sus instituciones y las compañías que tienen interés en su tierra, pueden visualizar y posibilitar una nación que refleje realmente el espíritu del desarrollo sostenible. Al respecto, quienes hemos participado en el EITI Colombia esperamos más que una candidatura. Más allá de esfuerzos puntuales que quizás no van a tener un mayor impacto a largo plazo, se requiere de un esfuerzo mancomunado y constante que integre diferentes voces y posiciones. En realidad, queremos que los partícipes del sector minero-energético, incluidos los funcionarios, académicos, y los directivos empresariales, construyan una industria extractiva que no solo sea más libre, sino también más justa. ●